



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL**

Medellín, siete de septiembre de dos mil veintitrés

Procedimiento: Ejecutivo
Demandante: Jorge Mario Patiño Zuluaga
Demandado: Fredy Alexander Medina Balbín
Radicado: 05001-22-03-000-2023-00466-00
Decisión: Dirime conflicto de competencia

Magistrado Ponente: Martín Agudelo Ramírez

Se resuelve el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Veinticuatro Civil Municipal y Sexto de Ejecución Civil Municipal de Medellín.

I. ANTECEDENTES

Jorge Mario Patiño Zuluaga promovió demanda con pretensión ejecutiva en contra de Fredy Alexander Medina Balbín para el recaudo de la obligación contenida en un título valor – letra de cambio, cuyo trámite correspondió al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín.

El aludido despacho profirió auto que ordenó seguir adelante con la ejecución el 24 de abril de 2023, y en la misma fecha liquidó las costas del procedimiento, proveídos ejecutoriados el 28 de abril siguiente. Posterior a ello, remitió el expediente a la Oficina de Ejecución Civil Municipal de Medellín, para que, previo reparto, un juez de ejecución continuase conociendo del mismo. Lo anterior, de conformidad con los acuerdos

PSAA13-9984 de 2013, PCSJA18-11032 del 2018 y PCSJA10678 de 2017 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura.

Una vez recibido por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución, este se abstuvo de conocer del asunto y resolvió devolver el expediente al juzgado de origen. Argumentó, en síntesis, que el juzgado de origen no tuvo en cuenta lo previsto en el numeral 8° del artículo 3° del Acuerdo PCSJA17-10678 de 2017, porque el 3 de mayo de 2023 fue presentado incidente de oposición a la diligencia de secuestro adelantada el 30 de marzo del mismo año. Por eso, como el proceso le fue repartido el 11 de mayo de 2023, es decir, con posterioridad a la presentación del incidente, era el juez de conocimiento quien debía pronunciarse frente al mismo.

El Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín inconforme con la devolución del expediente, propuso conflicto negativo y dispuso la remisión del expediente al superior funcional común a ambos.

II. CONSIDERACIONES

El artículo 139 del Código de General del Proceso establece que el juez que declare su incompetencia deberá remitirlo al que estime competente, pero cuando el que lo reciba considere a su vez que no es quien debe conocer del caso, solicitará que el conflicto se decida por el superior funcional común a ambos.

En el presente debate, dos juzgados municipales, el de conocimiento y el de ejecución, manifiestan su negativa a asumir la atención del expediente sometido a consideración de la jurisdicción.

Luego, a esta Sala Unitaria de Decisión Civil le asiste la competencia para resolver el conflicto, dada su condición de superior funcional común a ambas autoridades. Esto, por cuanto, según el artículo 33 del CGP, los

superiores funcionales de los juzgados civiles municipales son los jueces civiles del circuito; mientras que el artículo 10 del Acuerdo PSAA13-9984 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, establece que los jueces de ejecución civil del circuito son los superiores funcionales de los jueces de ejecución civil municipal.

En tal sentido, a efectos de determinar a cuál de las dos autoridades judiciales señaladas le corresponde conocer de la solicitud de ejecución, conviene delimitar el marco de actividad jurisdiccional de los juzgados en conflicto.

De los juzgados civiles de ejecución de sentencias

El Acuerdo PSAA13-9984 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se reglamentaron “los Juzgados de Ejecución Civil”, estableció en su artículo 8°:

*“Distribución de asuntos a los Juzgados de Ejecución Civil. A los Jueces de Ejecución Civil se les asignarán todas las actuaciones que sean necesarias para la ejecución de las providencias que ordenen seguir adelante la ejecución, inclusive la que se adelante con ocasión de sentencias declarativas. **En el marco de sus competencias, los jueces de ejecución civil conocerán de los avalúos, liquidaciones de costas y de créditos, remates, demandas acumuladas, incidentes de cualquier naturaleza, oposición o solicitudes relacionadas con las medidas cautelares, así como de las demás actuaciones de cualquier naturaleza que se adelanten a partir de la ejecutoria de la providencia que ordena seguir adelante la ejecución**”.*

Ahora bien, la Sala Administrativa, en uso de sus potestades reglamentarias, dispuso en el artículo 2° del acuerdo PCSJA17-10678 de 2017 modificado por el Acuerdo PCSJA18-11032 de 2018, lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo 9984 de 2013, inicialmente no deben trasladarse los siguientes procesos: a. Los que no tengan la liquidación de costas en firme. b. Los que sean susceptibles de terminación por desistimiento tácito por haberse configurado algunos de los supuestos que permiten proferir esa providencia, o que a la fecha de la remisión falten menos de dos meses para su ocurrencia. c. Los que tengan fijada fecha para audiencia o diligencia de cualquier naturaleza. d. Los que no hayan tenido actividad en los últimos seis meses”.

De la disposición trasunta pueden colegirse distintos eventos que imposibilitarían el envío de los expedientes a los jueces de ejecución civil, sin que del escenario normativo aludido se aprecie la posibilidad de interpretar o calificar el contenido del articulado para incluir aspectos no reglados en él.

En tal sentido, habiéndose definido la ejecución mediante sentencia o auto favorable al promotor del procedimiento, y no ubicándose el asunto en alguno de los presupuestos que impedirían su direccionamiento a los jueces de ejecución, deviene imperioso que así proceda el juez del conocimiento, tanto más porque el artículo 27 del CGP prescribe que *“Se alterará la competencia cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura haya dispuesto que una vez en firme la sentencia deban remitirse los expedientes a las oficinas de apoyo u oficinas de ejecución de sentencias declarativas o ejecutivas”*.

Caso concreto

El Juzgado Sexto de Ejecución Civil Municipal de Medellín se abstuvo de avocar el conocimiento de la presente actuación aduciendo su falta de competencia. Sin embargo, con su proceder desatendió las prescripciones de que trata el inciso 2º del artículo 8º del Acuerdo nro. PSAA13-9984, tal como pasará a explicarse.

A efectos de resolver el conflicto suscitado entre las referidas autoridades, resulta necesario establecer, en primer lugar, si el procedimiento ejecutivo se encontraba bajo alguno de los supuestos establecidos en el artículo 2º del acuerdo PCSJA17-10678 de 2017, y que por tanto fuera imposible su remisión a los jueces de ejecución. Superado ese punto, en segundo lugar, habrá de determinarse si, ante la presentación de un incidente de oposición al secuestro, aun cuando el procedimiento se podía remitir al juez de ejecución, obligaba a que el juez de conocimiento conservara la competencia.

En lo que al primer punto se refiere, de lejos se encuentran superados los requisitos para que el proceso pudiera remitirse a fin de continuar con la etapa de ejecución: i) cuenta con liquidación de costas en firme; fue aprobada en auto de 24 de abril de 2023 y quedó ejecutoriada el 28 de abril siguiente; ii) ante tal actuación no podía considerarse la terminación por desistimiento tácito (el proceso no se encontraba inactivo por más de un año); iii) tampoco logra constatarse que estuviera fijada fecha para audiencia o diligencia alguna, y mucho menos, por obvias razones, iv) no puede decirse que no hubiera tenido actividad en los últimos seis meses.

Así las cosas, el juez de conocimiento podía proceder con el envío del expediente a los jueces de ejecución, en tanto no se encontraba configurado ninguno de los supuestos, de acuerdo a la disposición en comento, que hiciera inviable su remisión para continuar con la ejecución de la sentencia. Además, como se dijo, son las situaciones previstas en el referido artículo, y no otras, producto de interpretación o calificación adicional, las que impiden el envío del proceso a ejecución, habiéndose constatado en este caso que ninguna de ellas se presentó.

En lo que al segundo punto se refiere, no puede afirmarse que el juez de conocimiento hubiera desconocido lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 3° del Acuerdo PCSJA17-10678 de 2017. Por el contrario, efectivamente es esta disposición la que habilitaba al juez de la ejecución para dar trámite al incidente de oposición allegado el 3 de mayo de 2023.

La regla es clara: dentro de sus competencias los jueces de ejecución conocerán, entre otros, incidentes de cualquier naturaleza, oposición o solicitudes relacionadas con las medidas cautelares, así como de las demás actuaciones de cualquier naturaleza que puedan presentarse con posterioridad a la providencia que ordenó continuar con la ejecución. El incidente de oposición presentado se encuentra incluido en tal disposición.

Ahora, si bien resulta cierto que, según el numeral 8° del artículo 3° del referido acuerdo PCSJA17-10678 los jueces seguirán conociendo tanto de los recursos interpuestos, como de las diligencias y audiencias ya programadas o iniciadas, ello se encuentra enmarcado **en los procesos y actuaciones en curso que no deban remitirse**, y en este caso, como se explicó, estaban dadas las condiciones para que el expediente fuera remitido para continuar con la ejecución.

Por otra parte, aunque la diligencia de secuestro se llevó a cabo el 30 de marzo de 2023, incluso antes de proferirse el auto que ordenó seguir adelante la ejecución; no se puede pasar por alto que el incidente de oposición al secuestro se presentó el 3 de mayo de 2023, esto es, cuando el auto que aprobó la liquidación de costas ya se encontraba en firme.

A su vez, la intelección del juez de ejecución resultaría contraria al artículo 27 del C.G.P, precepto que impone la alteración de la competencia cuando el Consejo Superior de la Judicatura haya dispuesto que una vez esté en firme

la sentencia deba remitirse el expediente a las oficinas de ejecución, como es del caso.

Bajo esas condiciones, como el asunto que genera conflicto cuenta con auto que ordena seguir adelante la ejecución y liquidación de costas, en firme, y el incidente de oposición fue presentado con posterioridad a la ejecutoria de esas decisiones; no existe óbice para que el Juzgado Sexto de Ejecución Civil Municipal de Medellín asuma el conocimiento del trámite, por lo cual se encuentran dadas las condiciones para que sea este quien continúe con la ejecución solicitada. Por tanto, se procederá a declararlo como competente en el presente asunto.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria de Decisión Civil, **RESUELVE:**

Primero: Declarar que el Juzgado Sexto de Ejecución Civil Municipal de Medellín es el competente para conocer del asunto en conflicto.

Segundo: Remitir a la citada judicatura la actuación surtida y comunicar lo decidido al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín, enviándole copia de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ
Magistrado